

EL CONSTITUCIONAL.

DIARIO LIBERAL

NUM. 13.

PRECIOS DE SUSCRIPCION.—En Alicante: un mes 7 rs., un trimestre 20.—Fuera de la capital, 23 rs. Trimestre.—En el extranjero, un mes 14 rs., un trimestre 40. Números sueltos 4 cuartos. Se suscribe en la imprenta de este periódico, calle S. Francisco, 21, y en la Administración plaza del Teatro, 8. En Madrid y París C. A. Saavedra.

ALICANTE: Domingo 29 Octubre 1871.

ANUNCIOS.—A precios convencionales.—El pago será anticipado.
COMUNICACIONES.—A precios convencionales. Los comunicados o escritos de cualquiera especie que se remitan a la redacción no se devuelven aun cuando no se publiquen.

AÑO I.

ADVERTENCIA.

Los suscritores al *Eco de Alicante* que tienen satisfecho por adelantado el importe del trimestre corriente que principió en 1.º del mes actual, y los que han satisfecho de igual modo la suscripción del presente Octubre, recibirán *El Constitucional* en sustitución de aquel, el cual se ha encargado de cubrir dichas suscripciones. Igualmente servirá todas las que el citado *Eco de Alicante* tenía; mientras continúan honrándonos sus suscritores. Este periódico se hace cargo también de todos los anuncios del *Eco de Alicante*, cuyo derecho nos ha cedido, mientras no dispongan otra cosa en contrario los interesados, que serán servidos con igual exactitud.

Sociedad exploradora de aguas subterráneas en el término de Villena para conducir las a Alicante.

La Junta accidental de la misma convocó junta general a todos los socios y demás señores que se interesen por el bien de este país para la instalación definitiva y tratar de asuntos pertenecientes a la misma.

La reunion se efectuará el día 1.º de Noviembre en el Teatro principal a las diez de la mañana. El secretario, José M. Celdrán.

CÓRTESES.

CONGRESO.

PRESIDENCIA DEL SR. SAGASTA.

Sesión del día 25 de octubre de 1871.

Abierta a las tres y leída el acta de la anterior, fué aprobada.

El Sr. Martínez Izquierdo preguntó si era exacta la noticia de haber sido separado el señor Iglesias y Barceñas del vicariato castrense, y dijo que se reservaba el exponer lo que se le ofrecía sobre ese acto.

El Sr. Borrás apoyó una proposición para que se nombre una comisión de catorce diputados que examinen todos los expedientes de contratos de servicios públicos desde el día 29 de setiembre de 1868 hasta hoy.

Tomó el Congreso en consideración y la aprobó.

El Sr. Barrio y Mier apoyó otra proposición para que los títulos obtenidos en las Universidades libres tengan igual valor que los que espidan las Universidades oficiales.

El Congreso la tomó en consideración. Se entró a discutir la proposición del voto de confianza al Gobierno.

El Sr. Rodríguez (don Gabriel) consumió el primer turno en contra. El orador negó la conveniencia de perseguir a la «Internacional», porque esto sería darle una importancia que no tenía, y porque lo que debía hacerse era combatir sus doctrinas y sus tendencias, pero respetando el derecho de su existencia.

Creía que esta discusión, estensa en demasía, mas era una discusión política, en la que la «Internacional» servía de pretexto, y el propósito de deslindar los campos políticos era el fin, que una discusión sobre la asociación de que se trataba.

Dijo que se trataba de principios conservadores y radicales, y que él defendía y defenderá siempre el radicalismo contra la reacción.

Explicó como comprendía los orígenes y la vida íntima de la «Internacional», diciendo que nació después de haberse visto prácticamente en 1848 que la idea constitucional del derecho al trabajo no era posible, y a los dos años de realizarse la tercera Exposición internacional, cuando se reunieron los obreros en Londres.

Entonces no tenía carácter político, hasta que los partidos políticos comunistas franceses la comprometieron en sus tendencias y sus fines.

La «Internacional», pues, existía como una consecuencia lógica de la eterna aspiración comunista, propia de los socialismos de todas las épocas.

Después de haber tenido ese carácter político, era evidente que la «Internacional» se volvía contra la misma clase obrera, a la que perjudicaba; y declaró que entre todas las secciones de Europa ninguna mas mala y mas pervertida que la española o la francesa.

Dicho esto, entró a hablar sobre esta asociación y de sus derechos con relación a los consignados en la Constitución, deduciendo que la Constitución, al señalar los límites de un derecho, no puede declararlo fuera de la ley.

Descansó el orador algunos minutos y prosiguió su discurso; aduciendo argumentos, demostrando que al suprimir la «Internacional» por una ley solo serviría para darla mayor fuerza, porque entonces se disfrazaría con apariencias de otras asociaciones y viviría a despecho de aquella ley, al amparo de la Constitución.

La realización de aquella ley solamente se comprende cuando amenazara con la fuerza para luchar en el terreno de ella; pero mientras tanto, debe lucharse sin descanso ni tregua en el terreno de las ideas.

No había, pues, otro medio para combatir la «Internacional» que no temerla y combatirla en sus ideas con otras y en sus asociaciones con otras asociaciones, encargando de esta tarea la iniciativa individual, sin que el Gobierno haga mas que estudiar y mejorar al propio tiempo la situación de las clases trabajadoras.

El Sr. Jove y Havia rectificó.

El Sr. Alonso Martínez pidió perdon al Congreso porque vuelvo de nuevo a molestarle contra mi costumbre, pero debo diferir a las indicaciones de ciertos amigos que me instan para que rectifique.

No he podido oír el principio del discurso del señor Rodríguez; pero he podido averiguar lo que ha dicho, me parece que ha empezado por felicitarlo de que yo, en nombre de ciertas clases, hubiera aceptado la Constitución de 1869 como un hecho, aunque diciendo que estaba fuera de ella. Esto no es exacto, yo he aceptado la Constitución, no como un hecho, sino como el único derecho vigente en España. Yo no acepto las Constituciones más que en absoluto, y no hago lo que ciertos diputados y ciertos partidos, que manifiestan aceptar la Constitución sin aceptar su base cardinal, que es la Monarquía de don Amadeo I.

Además, yo no estoy fuera de la Constitución; lejos de eso, he pedido que se apliquen sus artículos. S. S. cree que yo no la entiendo, y a mi vez yo creo que no la entienden S. S., que ha confundido el derecho de hablar y de escribir, que no tienen límites en la Constitución, aunque sí en el Código penal, con el de reunirse, con el de asociarse, con el derecho a la libertad de cultos, que ya tienen sus limitaciones en la Constitución misma.

Y ya de que esto hablo, no puedo menos de escitar a los señores Ruiz Zorrilla y Montero Ríos a que digan lo que piensan en este punto, porque aquí no hemos conocido hasta ahora más que las opiniones de los republicanos y de los demócratas, y es preciso que sepamos qué piensan en esta cuestión gravísima los progresistas históricos, y qué piensa del art. 198 del Código penal el señor Montero Ríos, que era el ministro que presentó la reforma del Código penal anterior.

Tampoco es exacto que el señor Ríos Rosas y yo no estamos conformes con la aceptación de los derechos individuales. Yo estoy seguro de que, aun cuando podamos variar en algún detalle, sustancialmente estamos conformes en eso. Para no estarlo sería preciso que yo no hubiera reconocido siempre derechos anteriores a la ley, y dije ayer, y repito hoy, que los he reconocido en todas ocasiones, aquí y fuera de aquí, antes de que los señores demócratas hubieran tratado

de enseñarnos; porque desde Aristóteles, señores, se planteó de tal manera la existencia de los derechos anteriores a la ley, que después de dos mil años el problema no ha podido ir mas adelante. Aristóteles decía que había derechos en el individuo y había derechos en el Estado, y que era necesario armonizar los unos con los otros. ¿Qué razón tenéis, pues para presentarnos vuestras ideas como ideas nuevas?

El señor Rodríguez me hizo luego otra alusión benevolente y cortés, como son todas las de S. S. Decía el señor Rodríguez que yo había expuesto una teoría falsa de los derechos individuales, a causa de que no tenía una noción clara del derecho. Yo no presumo tener esa idea clara del derecho, porque tener esa noción sería tener la ciencia entera, y sería presumir demasiado sostener que aun habiendo dedicado toda su vida a una ciencia, se llega a poseerla; pero ¿por qué me dice a mi esto el señor Rodríguez? Porque supone que yo he considerado al hombre aislado, que es un mito, y señores, ¿de esto se me acusa a mi, que estoy haciendo muchos años dedicando todos mis trabajos a demostrar que el hombre aislado no existe en parte alguna?

Dice luego S. S. que el derecho nace de la relación en los seres sociales; pero entonces, ¿cómo puede dejar de ser relativo? Señores, ¿si tendiéramos que olvidar hasta el diccionario de la lengua? Yo comprendo que se sostengan dos derechos absolutos cuando se profesa la filosofía de Fichte o de Hegel; pero cuando se dice que el fundamento del derecho es una relación, ¿cómo se quiere sostener que el derecho no es relativo?

Se dice que la «Internacional» es profundamente inmoral, pero que no es contraria a la moral pública, porque no es contraria a la ley; pero señores, ¿no dice la ley que son ilícitas las asociaciones contrarias a la moral pública? El señor Rodríguez insiste en lo que decía ya el señor Castelar, de que la Constitución no prohíbe más asociaciones que las que tratan de faltar al Código penal.

Ya contesté el otro día a este argumento: si la Constitución dice que son ilícitas las sociedades contrarias a la moral, y en otro punto dice que son ilícitas las que delincan, es claro que establece distinción entre esos dos casos; es claro que no dice lo mismo en un punto de lo que dice en el otro; tanto más, cuanto que en el Código penal establece dos casos perfectamente distintos de penalidad para las sociedades contrarias a la moral y para las que delincan, con arreglo al Código. Porque el decir que en el primer caso del Código pueden comprenderse las faltas, no es hacer un argumento serio.

Dán como razón los señores Rodríguez y Castelar que la moral no puede definirse, que es una cosa vaga, y que dejando al arbitrio de un juez que decidiera lo que es a y no era moral, quedaríamos expuestos a una gran arbitrariedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no se puede saber en esta sociedad lo que es justo y lo que es injusto, lo que es licito y lo que es ilícito, lo que es moral y lo que es inmoral?

Pues aun aceptando en hipótesis esa interpretación, yo podría decir: si es tan difícil o si es imposible apreciar la moral, ¿por qué habéis engañado al pueblo escribiendo la palabra moral en la Constitución? Yo interpele nuevamente al señor Ruiz Zorrilla y al señor Montero Ríos, principalmente al último, para que nos diga si al poner esos dos casos en el Código penal ha querido decir lo mismo, ha querido repetir en un caso lo que ya había dicho en el otro.

El señor Rodríguez decía: ¿tenéis por inmoral la propiedad colectiva? Pues condenais toda la tendencia del progreso moderno. S. S. confunde el derecho de hablar y escribir con el derecho de asociación; la palabra hablada o escrita no tiene limitación en el Código fundamental, aunque puede delinquirse por medio de la palabra. Florez Estrada podía, pues, escribir sobre la propiedad colectiva; pero ya no se trata de escribir, sino de asociarse, y respecto de la asociación se dice en la Constitución que es hecho asociarse para todos los fines de la vida humana

que no sean contrarios a la moral; por consiguiente, lo que podía hacer el escritor, la asociación no puede hacerlo.

Y viniendo luego a considerar la libertad religiosa, el señor Rodríguez nos decía que podrían venir aquí ciertas sectas que hicieran algo para nosotros sumamente inmoral, y que no podríamos hacer nada contra ellas. S. S. aludía sin duda a la secta de los mormones, y yo le digo a S. S. que si esa secta tuviera por desgracia su cucaes en España, yo pediría para ellos por lo menos lo que se ha hecho en los Estados Unidos; arrojarnos de la nación.

Y os pediría eso, no, porque esa secta predica doctrinas que a mi me causan repugnancia, y asco, sino porque no está dentro de la Constitución. El art. 21 dice: (Ley 6.ª) Aquí se añade a las reglas universales de la moral y del derecho: ¿vive dentro de la moral tolerable una asociación de mormones?

Yo no comprendo, señores, que digais tantas veces que no es definible la moral, cuando la habéis usado tan repetidamente en vuestro Código. Pero además, ¿no han tenido siempre los jueces de todos los países que apreciar la moral? Pues ¿qué remedio tiene el juez que ha de decidir de la validez o de la nulidad de un contrato sino apreciar si se arregla o no se arregla a las reglas de la moral?

El señor Ruiz Zorrilla: Me levanto, señores, a cumplir un deber de cortesía para con el señor Alonso Martínez, y para decir que cuando me ocupe de otras alusiones que se me han hecho y que aun es probable que se me hagan en el curso del debate, tendré mucho gusto en contestar a las interpelaciones que me ha dirigido S. S.

Hoy no me levanto más que para explicarle la razón por qué no contesto inmediatamente, esperando hablar una vez sola.

El Sr. Rodríguez (D. Gabriel): El señor Alonso Martínez ha hecho una rectificación muy importante y yo necesitaria para contestarle bastante tiempo. Antes de empezar mi rectificación diré al Sr. Jove y Havia que no me he referido a S. S. al tratar del giro dado a esta cuestión.

En cuanto a las doctrinas de Florez Estrada, no es un solo pasaje de un libro donde manifiesta las que yo he citado; estas ideas nacen de la teoría de Ricardo acerca de la renta de la tierra, que el Sr. Florez Estrada recuerdo profesaba.

Estoy en malas condiciones para contestar al señor Alonso Martínez, porque S. S. no me ha oído y ha contestado solo a miembros dispersos de mi discurso; que no ha podido relacionar bien. Yo no he tratado de ningún modo de arrojar fuera de la Constitución al Sr. Alonso Martínez. ¿Cómo había de hacer eso cuando quiero que no esté fuera de la Constitución ni siquiera «La Internacional»? No; lo que he hecho ha sido combatir la interpretación que S. S. da a esa ley, y que en mi concepto no está conforme con la interpretación auténtica que le dieron sus autores.

El Sr. Alonso Martínez nos dice que pueden anularse los contratos contrarios a la moral; pero ¿ha probado S. S. que al anular el juez un contrato, por inmoral o contrario a las costumbres, no mire para nada al Código penal? ¿Ha probado S. S. que para estos casos el juez no tenga una pauta legal a qué ajustar su criterio? Pues entonces no es el caso el mismo que cuando no tiene mas norma que su juicio para apreciar lo que es moral pública.

Mucho mas tendría que decir, pero conozco el cansancio de la Cámara y lo avanzado de la hora; yo mismo me siento muy fatigado, y como no la dé faltarme alguna ocasión en que poder decir lo que ahora no digo, me siento esperando que esa ocasión ha de presentarse.

El Sr. Presidente: Se suspende esta discusión.

Se aprobaron sin debate los dictámenes de las respectivas comisiones denegando la autorización pedida para oncausar a los señores diputa-

